

Considerando: Que de las actuaciones no resulta que los quejosos aparezcan como reos de algunos de los delitos á que se refiere el decreto citado, y que por lo mismo, el procedimiento del ciudadano Gefe Político de Tlaxiaco, ataca las garantías á que se refieren los artículos, 13, 21 y 23 de la Constitución federal, se decreta:

Que se confirma la sentencia pronunciada el día 4 del presente mes y año por el Juez de Distrito de Oaxaca, que declara en primer lugar: que la Justicia federal ampara á Jesus Saavedra, Manuel Gonzalez Herrera y Francisco Saavedra, contra la providencia dictada por el ciudadano Gefe Político de Tlaxiaco, que los condenó á muerte; y en segundo lugar, que se ponga á los reos á disposicion de su Juez competente, para los efectos á que hubiere lugar.

Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito de Oaxaca, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron, por unanimidad de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogasan.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Antonio Escandon y Estrada, ante el Juzgado 1º de Distrito de México, contra el ciudadano Ministro de Hacienda, que le niega la devolucion de unas escrituras, propiedad de lquejoso.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Antonio Escandon se presentó al Juzgado, interponiendo recurso de amparo contra la providencia del ciudadano Ministro de Hacienda, que mandó, no se devolvieran al quejoso los testimonios de unas escrituras que presentó á la seccion 6ª, para comprobar ora acreedor al capital de siete mil seiscientos cuarenta y siete pesos, que le reconocian las casas número 24 de la primera calle de Mesones y 1 de los Gallos, y le habia cedido el Presbítero D. Guadalupe Rivas. Los fundamentos en que el Ministerio apoyó su resolucion, fueron: que esas escrituras eran fraudulentas, por haberlas otorgado el Presbítero Rivas setenta y nueve dias despues que habian pasado las fincas al dominio de la Nacion. El punto en cuestion, se reduce á averiguar si el ciudadano Ministro de Hacienda, con su resolucion, violó la garantía otorgada en el artículo 27 de la Constitución. Si el artículo se interpreta en un sentido literal, podría decirse, que no procedia el amparo; pero tomándolo en el sentido constitucional, es evidente que el acto reclamado debe restituirse por vía de amparo. Es un hecho que el ciudadano Escandon tenia un título, que si es nulo en la esencia, es bueno en la forma, y lo primero no podia declararse sino por la autoridad correspondiente. Si se hubiera hecho la devolucion de los testimonios sin declaracion, cabia el que el ciudadano Escandon negociara un crédito nulo; pero esto afectaria los intereses de particulares, é importa-

ría la responsabilidad por la eviccion y saneamiento. Como el Gobierno remitió las citadas casas, y estaba interesado en alejar contiendas que le suscitaban si aparecían gravámenes que no consideró al enagenar, por desconocerlos ó ignorarlos, pudo por un buen celo por los intereses federales, dictar la disposicion reclamada, considerándolo en sus facultades, pero con esta sí atacaba buenos ó malos derechos, que en la forma podian presentarse como legales.

Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar que procede el amparo respecto al acto reclamado; pero las escrituras, por el conocimiento que tiene el Gobierno de su nulidad, no debe ni retenerlas ni devolverlas al quejoso, sino remitirlas á un Juzgado de la Federacion, para que en el juicio correspondiente, se resuelva lo que fuere de justicia.

México, Marzo ocho de mil ochocientos setenta y uno. — (Firmado.) — *Herrera Campos.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de México.—México, Marzo 9 de 1871.

Visto este juicio de amparo seguido ante este Juzgado 1º de Distrito, á solicitud del ciudadano Antonio Escandon y Estrada, el que asegura se han violado en su persona las garantías que otorga el artículo 27 de la Constitucion general de la República, por el contenido de la comunicacion del Ministerio de Hacienda, de fojas 1º; vistas las diligencias practicadas; las pruebas rendidas y lo pedido por el ciudadano Promotor de este Juzgado; y visto lo que se ha tenido presente para pronunciar esta sentencia, de todo lo cual resulta que se debe considerar:

1º Que habiéndose puesto en almoneda la casa número 24 de la calle 1ª de Mesones, por la seccion 7ª del Ministerio de Hacienda, el ciudadano Escandon y Estrada

se presentó ante dicha seccion, acompañando dos escrituras otorgadas, la primera por Dª María Dolores Yañez, á favor del Dr. D. Manuel Basilio Arrillaga, en 15 de Abril de 1864, ante el notario D. Luis Rodríguez, y la segunda, por el Presbitero D. José Guadalupe Rivas, como albacea del finado Dr. Basilio Manuel Arrillaga, á favor del ciudadano Escandon, el 5 de Setiembre de 1868, ante el notario D. Antonio Campos de la Vega, interponiendo intercepción de preferencia para ser pagado del crédito de \$7,647 57 es., con el precio de la casa, en virtud de la hipoteca; que se suspendiera la almoneda; que se le expediera certificado para su resguardo, de haber presentado los testimonios, y que el expediente se pasase al Juzgado de Distrito.

2º Que no habiéndose proveído á su recurso de 22 de Octubre de 1868, se presentó de nuevo con fecha 9 de Setiembre del año próximo pasado, pidiendo la devolución de las escrituras, á cuya nueva presentacion recayó el acuerdo que consta en la comunicacion de fojas 1ª, y que ha motivado el recurso del presente amparo.

3º Que por la comunicacion dicha queda probado, que el ciudadano Escandon presentó las escrituras mencionadas, las que no se le han devuelto, por asegurar la seccion 6ª del Ministerio, que el capital de \$7,647 57 es. que estaba á favor del Dr. Arrillaga, en virtud de la primera escritura, y que fué cedida á Escandon por la segunda, era propiedad de la ex-compañía de Jesus, la que había pasado á poder de la Nacion setenta y nueve dias antes de que se hiciera la cesion, por lo que en parecer de la misma seccion, Escandon reclama un documento que sirve á la República para entrar en posesion del capital; otro que fué otorgado fraudulentamente, y que por lo mismo debe cancelarse la escritura de 15 de Abril de 1864.

4º Que habiéndose pedido el informe respectivo al Ministerio de Hacienda, éste remitió como tal informe el de la seccion 6ª, que se reduce, á que no teniendo capacidad

ninguna corporacion para adquirir bienes raices, y constando que el crédito reclamado por Escandon, pertenecia á la ex-compañia de Jesus, y despues á la Nacion, ha resultado la confusion del crédito, razon por la que se ha podido mandar cancelar la escritura de 15 de Abril de 1864; y respecto de la de 5 de Setiembre de 68, cree la seccion que está en la facultad del Gobierno considerarla nula, por las razones expuestas en la comunicacion de fojas 1ª, siendo todo esto motivo para que las dos escrituras estén en poder del Gobierno.

5ª Que oido al ciudadano promotor en virtud de lo que expuso, este Juzgado no mandó suspender la órden, sino que proveyó siguiera el juicio y se pidiera informe justificado al Ministerio de Hacienda, el que á pesar del tiempo trascurrido no lo ha remitido, resultando que quedan sin justificacion los conceptos vertidos por las secciones 6ª y 7ª del mismo Ministerio.

6ª Que recibido este negocio á prueba, Escandon manifestó que á pesar de estar probado plenamente con la comunicacion de fojas 1ª que presentó ante el Ministerio, las escrituras tantas veces citadas, solicitaba se pidiera al mismo Ministerio el expediente original ó copia de él, á cuya solicitud se proveyó de conformidad sin conseguir la remision, no obstante los recuerdos librados, por lo que no pudiéndose por mas tiempo dilatar el presente juicio, se mandó citar para sentencia.

7ª Que constando ser cierta, segun la comunicacion del Ministerio de Hacienda, la propiedad que tiene el ciudadano Antonio Escandon y Estrada en las escrituras de 15 de Abril de 1864 y 5 de Setiembre de 1868, las que no se han devuelto, determinándose acerca de ellas, sin que esto haya sido hecho por la autoridad competente, es claro que la propiedad de estas escrituras ha sido ocupada sin el consentimiento de Escandon, y por lo mismo se han violado en su persona las garantías que otorga el artículo 27 de la Constitucion.

8ª Que debe tenerse presente, que si las

escrituras tienen algun vicio por el cual se trata de defraudar á la nacion, deben remitirse al juzgado respectivo para que ante él se ventilen los derechos de ella y los de Escandon; y

9ª Que el ciudadano Promotor es de parecer que el amparo debe concederse en virtud de las razones que expone (fojas 14), cuyas razones bastante fundadas deben estimarse; por lo que, con arreglo á ellas, á todo lo expuesto, al tenor de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general de la República y al de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que la Justicia federal ampara y protege al ciudadano Antonio Escandon y Estrada, en contra de lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, en su comunicacion de fecha 25 de Octubre de 1870, constante á fojas 1ª Hágase saber, sáquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el *Diario oficial y Semanario judicial*, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia. Así lo mandó y firmó el ciudadano Juez 1º de Distrito Lic. José Isaac Sanchez: doy fe.—*J. I. Sanchez.—Joaquín Sanchez Gonzalez.*"

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 16 de Diciembre próximo anterior promovió ante el Juez 1º de Distrito de esta capital D. Antonio Escandon y Estrada, alegando: Que el dia 22 de Octubre de 1868, presentó escrito al ciudadano jefe de la seccion 7ª del Ministerio de Hacienda, acompañando dos testimonios de escrituras otorgadas, la primera por Dª María Dolores Yañez, el Lic. D. Basilio José Arrillaga, como albacea de Dª María Yañez, y el Dr. D. Basilio Manuel Arrillaga, en 15 de Abril de 1864, ante el Notario público D. Luis Rodríguez y Palacios; y la segunda, por el

Presbítero D. José Guadalupe Rivas, como albacea del finado Dr. D. Basilio Manuel Arrillaga, y el promovente, en 5 de Setiembre de 1868, ante el notario público D. Antonio Campos de la Vega, que en su escrito pidió: fundado en tales documentos, que se tuviera por interpuesta la tercería de preferencia que le correspondía, para ser pagado del crédito de \$ 7,647 57 y réditos de su pertenencia, con el precio de la casa número 24 de la calle de Mesones, hipotecada por él especialmente; que se suspendiera la almoneda de esa finca; que se le expidiese la constancia de haber presentado las mencionadas escrituras, y que se remitiese el expediente que se había de formar al Juzgado de Distrito; que agregados los testimonios al expediente de almoneda, sin haberse proveído nada al ocurso del quejoso, dirigió éste un escrito al Ministerio de Hacienda, pidiendo la devolución de aquellos documentos, y que esta petición había tenido el resultado que se le comunicó, por el oficio que acompaña, fecha 25 de Enero del año próximo pasado, de cuyo oficio aparece, que se le niega la devolución de sus escrituras, y se le anuncia, que se iba á librar y acaso se había librado ya orden para la cancelación de la de 15 de Abril de 1864; que el Poder Ejecutivo que no podía tener otro carácter que el de parte en este asunto, con la denegación de estos documentos, que son de la propiedad del reclamante y con la disposición sobre la cancelación de una escritura suya, ha violado el artículo 27 de la Constitución de la República y le ha colocado en aptitud de quejarse, suplicando, como suplica, que se le conceda el amparo respectivo contra la resolución del Ministerio de Hacienda que ha indicado, y que se suspendiera la orden de cancelación á que ha aludido. Vista la resolución del Ministerio de Hacienda á que el quejoso se refiere, en la que confesándose la presentación de las escrituras dichas, se expresa, que el capital de \$ 7647 57, que reconocía la finca de la calle de Mesones, y la casa número 1 del callejón de los

Gallos, á favor del Dr. Arrillaga, según la primera de aquellas constancias, y que fué cedido á Escandon por el Presbítero Rivas, según la segunda, eran de propiedad de la compañía de Jesús, y habían pasado á dominio de la Nación, setenta y nueve días antes de que el Presbítero Rivas hiciera sesión de ellas á Escandon; de donde deduce el Ministerio, que este individuo reclama un documento que sirvió de título á la República para entrar en posesión del capital referido, y otro documento otorgado fraudulentamente por el Presbítero Rivas, con el que pretendió sustraer del poder de la Nación aquella suma, y que con fundamento de aquellos hechos, no son de devolverse las escrituras á Escandon, y se debe librar la orden de cancelación que antes se dice. Visto el informe del propio Ministerio, cuando al sentenciarse el punto sobre suspensión del acto que solicita el promovente del amparo, ampliando las razones de su comunicación citada, y agregando que no se había librado la orden de cancelar que se ha expresado. Vistas las constancias de haberse pedido al Ministerio de Hacienda el informe justificado de la ley, sobre los hechos principales reclamados, y el expediente que allí se formó, cuya presencia en estos autos era como prueba pretendida por el quejoso; el alegato de esto, insistiendo en el amparo; el pedimento del ciudadano Promotor fiscal, sosteniendo que procede, y el fallo del Juez 1º de Distrito que lo decreta.

Considerando: 1º Que las escrituras dichas fueron presentadas al Ministerio de Hacienda por Escandon, como dueño y poseedor de ellas, y para el efecto de reclamar los derechos que cree tener contra el fisco.

2º Que una vez hecha la declaración por el Poder Ejecutivo, de vicio ó nulidad, y no habiéndola consentido el interesado, el asunto se ha vuelto contencioso, y llevar á efecto aquella, es violar las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución federal.

3º Que la concesion del amparo por el motivo expresado, en nada afecta el derecho y aun el deber que tiene el Ejecutivo para no devolver los citados documentos y remitirlos desde luego á la autoridad judicial competente, no solo para que resuelva lo que toque á los intereses del fisco, sino para que proceda á lo que corresponda sobre la responsabilidad criminal que pueda haber por fraude de dichos documentos. Por las razones y fundamentos expuestos, se resuelve:

Que es de confirmarse y se confirma, la sentencia que en 9 del corriente pronunció el Juez 1º de Distrito de esta capital, en la parte que declara: que la Justicia Federal ampara y preteje á D. Antonio Escandon y Estrada, en contra de lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en su comunicacion de fecha 25 de Octubre de 1870, constante á fojas primera de estos autos.

Devuélvanse sus actuaciones al mismo Juez de Distrito con testimonio de este auto, para los efectos legales, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por Tibureio Torres y Guillermo Castellanos, contra la sentencia del Gefe Político de la ciudad de Oaxaca, que condenó al primero de los quejosos á ocho años de presidio en el Castillo de San Juan de Ulúa, y al segundo á cuatro años de la misma pena y en el propio Castillo.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

Ciudadano Juez:

El ciudadano Lic. Isaac Cañas, como apoderado de Tibureio Torres y Guillermo Castellanos, se presenta agitando la secuela del juicio de amparo, que estos promovieron contra la sentencia del ciudadano Gefe Político del Centro, que condenó al primero á ocho y al segundo á cuatro años de presidio en el castillo de San Juan de Ulúa, como comprendidos en la Suprema circular de 12 de Marzo de 1861, declarada vigente por la de 18 de Abril del año pasado, en virtud de que el testimonio de personas respetables de esta sociedad bastante caracterizadas, como lo son, los ciudadanos José Manuel Suarez, Francisco Ogarrío, diputado al Congreso de la Union, Lic. José Esperon, propietario, y que ha desempeñado puestos públicos de categoría en el Estado, Manuel Diaz Ordaz, actual administrador del registro de granas y José María López, comandante de diurnos, aseguran que Tibureio Torres, es uno de los individuos que pertenecen á una sociedad de bandidos que con ganzuas han forzado puertas, y con escalas han asaltado casas, introduciéndose en ellas por la noche, y consumando robos escandalosos, como los de la casa de D^a Juliana Tamayo, que vive en la esquina de la Defensa, y la de D. Bernardo Berjes, que tambien fué saqueada. Estos mismos testigos declararon, que la fa-